

El Salvador proceso

informativo semanal

Año 21
número 933

enero 3
2001
ISSN 0259-9864

Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación

- El Salvador en dólares
- El balance de la opinión pública en el 2000
- La prensa escrita y la fiscalización del gobierno
- Proyecto de Ley de Integración Monetaria

El balance de la opinión pública en el 2000

De la revisión de los sucesos que impactaron la opinión pública durante el año 2000 sobresalen cuatro. En primer lugar, el proceso electoral que concluyó con los comicios municipales y legislativos y que dejó un escenario complejo en la vida política nacional; en segundo lugar y como ya es usual en los últimos años, el problema de la seguridad pública, con la particularidad de que en este año, las dificultades en esa área de interés público se vieron agravadas por el franco deterioro de la imagen pública de las instituciones vinculadas con ella, especialmente la PNC. En tercer lugar, la opinión pública se vio marcada por la confirmación de un contexto económico difícil; para los ciudadanos fue innegable el hecho de que el país ha entrado en un proceso de recesión del cual no parece haber salida a corto plazo, con todas las implicaciones que ello tiene. Finalmente, los sucesos ocurridos especialmente en el recinto legislativo contribuyeron a erosionar la ya anémica confianza de los ciudadanos en las instituciones del país y en los partidos políticos.

El anuncio de la nueva política de integración monetaria, el aumento en las tarifas eléctricas, los hidrocarburos y la sensación de que las instituciones del país son más incapaces de velar por los derechos de la ciudadanía contribuyeron a cerrar el año con un sentimiento de incertidumbre y de pesimismo entre la mayoría de los salvadoreños. Los proyectos de integración económica regionales, como el canal interoceánico, el Tratado de Libre Comercio con México y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, además de los anuncios de llevar adelante un programa de desarrollo de la infraestructura del país basada en el trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo y de las Bases

del Plan de Nación, si bien parecen generar alguna expectativa en los ciudadanos, no logran estimular una visión de optimismo sobre el futuro del país, sobre todo porque la mayoría de la gente mantiene una actitud de suspicacia de cara a la gestión nacional del gobierno.

A continuación, se analizan cada uno de los puntos identificados más arriba. Las elecciones municipales y legislativas del año 2000 se desarrollaron bajo un fuerte sentido de competitividad y dejaron un escenario políticamente complejo de cara a la opinión pública. El empate entre las dos fuerzas mayoritarias del país, ARENA y FMLN, fue el producto de dos o tres factores. En primer lugar, ese empate fue el producto del desgaste en la imagen del gobierno liderado por Francisco Flores, lo cual fue profundizado por la incapacidad de éste para lidiar satisfactoriamente con el conflicto laboral generado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El gobierno y particularmente el partido ARENA se vieron afectados por la percepción de que la nueva administración no estaba cumpliendo sus promesas, especialmente las que se referían a una nueva forma de apertura política de cara a la población; el conflicto en el Seguro Social no hizo sino confirmar ese sentimiento y mostrar que el gobierno no estaba dispuesto a escuchar las necesidades de la población salvadoreña. De ahí que el empate legislativo o, mejor dicho, la leve ventaja obtenida por el FMLN sobre ARENA en el número de curules legislativos se explica, en parte, por el desgaste del partido gobernante, antes que por una mejora sustancial de la imagen del FMLN. Sin embargo, esa no constituye toda la historia que explica el resultado legislativo de las elecciones. El

avance del FMLN se explica también por la fuerte imagen de eficiencia proyectada por el alcalde Silva y por una errada estrategia de conducción publicitaria llevada a cabo por ARENA. El partido de gobierno enfocó sus baterías hacia el alcalde capitalino esperando no sólo afectar su imagen sino también agudizar las diferencias internas que persistían en el FMLN; sin embargo, ARENA no pudo contrarrestar la imagen de eficacia de la alcaldía en momentos en que su propio gobierno se debatía en una crisis de legitimidad frente al público. Además, el perfil asumido por el candidato contendiente, Luis Cardenal, no estuvo a la altura de las exigencias planteadas por el proceso. Éste se dedicó a atacar a una figura que gozaba de la mayor popularidad política sin poder ofrecer un argumento de porqué era necesario un cambio en la alcaldía capitalina. El éxito de Silva en la capital fortaleció la imagen del FMLN en el resto de país; ello estimulado por la relevancia dada por los medios de comunicación y por la estrategia electoral de ARENA de enfocarse en la campaña municipal de San Salvador.

La victoria de Silva en la capital fue acompañada por la victoria del FMLN en la mayor parte de alcaldías de ciudades grandes del país. El partido de izquierda no sólo mantuvo la mayoría de sus gobiernos municipales sino que ganó otros donde parecía poco probable. En estos casos, hay razones para pensar que tanto el desgaste del partido ARENA en el gobierno nacional, como el éxito de Silva en la capital se sumaron a la percepción de gestiones municipales buenas o regulares para ayudar al FMLN a ganar tales ciudades.

Sin embargo, la elección no sólo se caracterizó por eso. La competencia en el ámbito legislativo dejó al partido PCN en unas condiciones extremadamente favorables para ocupar del tercer lugar en la correlación de fuerzas parlamentarias, esto en una dimensión que equivalía poco a su exiguo nivel

de votos obtenidos a nivel nacional. El PCN obtuvo más de diez curules con un apoyo que no excede al 3 por ciento de la población en edad de votar, lo cual lo ubicó en el tercer lugar de poder en la Asamblea.

Lo anterior fue posibilitado por la reedición del comportamiento de abstencionismo por parte de la mayoría de la población. Más de 60 por ciento de los salvadoreños, al igual que en las dos elecciones anteriores, decidieron no asistir a votar y quedarse en sus casas para atender otros asuntos. La razón por la cual la mayoría de la gente no votó fue más por decisión propia, por desconfianza e indiferencia hacia el proceso, que por causa de los problemas generados por el sistema electoral.

Todas esas condiciones dejan un escenario político complejo de cara al proceso político del país. Tal complejidad se basa en tres cosas. En primer lugar, porque los representantes políticos y los gobernantes fueron elegidos por no más del 35 por ciento de la población del país y cada uno goza —o sufre— con el apoyo directo de menos del 20 por ciento de los ciudadanos. Esto deja un serio problema de representatividad y de legitimidad de cara a la población. En segundo lugar, porque ninguna fuerza política por sí sola alcanza a tener el predominio en la dinámica política. Ello establece un escenario en donde la primera responsabilidad política sería la concertación —y no la componenda— de cara al país y la población. Y finalmente, porque sobrestima la fuerza de agrupaciones políticas minúsculas que están mejor ubicadas y preparadas para la componenda política que para la concertación. Eso permite romper el equilibrio de fuerzas políticas gracias al uso de mecanismos en los que privan los beneficios particulares por encima del respeto a la institucionalidad. Al final, se tiene un balance limítrofe: un sistema político con poca legitimidad que juega más a la componenda que a la concertación necesaria.

El segundo tema que ocupó significativamente el espacio de la opinión pública fue el de la seguridad pública. Esto desde varios ángulos y en función de varios escenarios institucionales. Primero, la delincuencia y la violencia siguieron siendo un problema grave que afecta a la mayoría de la población. Las encuestas reportaron que más del 15 por ciento de los ciudadanos fueron víctimas de algún hecho de violencia en el transcurso del año y que más del 50 por ciento de los mismos pensaba que la actividad delictiva se había incrementado durante el 2000. Aunque algunos estudios mostraron de forma consistente que es posible pensar en una disminución general de la violencia, los niveles continuaron siendo lo suficientemente altos como para ocupar los primeros lugares de preocupación y de discusión pública. En segundo lugar y bajo este contexto, el año 2000 fue el escenario para la revelación y prolongación de serios problemas de transparencia y de eficacia en varias instituciones vinculadas con el tema de la seguridad pública y la administración de justicia. La Policía Nacional Civil constituye la primera de ellas. Durante el primer semestre del año que ha finalizado, la prensa y las autoridades policiales —más la primera que las segundas— pusieron al descubierto la existencia de amplias redes de actividad delictual que operaban desde el interior del cuerpo policial y que contribuían de forma significativa a la ola delictual, sobre todo, la de carácter más grave como los secuestros y los asesinatos. Además, la opinión pública se concentró en examinar los problemas de eficacia que reflejaba la corporación, los cuales contribuían a la impunidad de los actos delictivos. Las autoridades de seguridad pública anunciaron un proceso de depuración que comenzó a desarrollarse con criterios y procedimientos poco claros para el resto de la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos comunicacionales por parte de las autorida-

des, buena parte de la población vio reducida aún más su confianza en la corporación. En la última encuesta de evaluación del año 2000, más de la mitad de la gente sostuvo que la PNC había perdido apoyo y confianza de la población durante el año que acababa de terminar y un porcentaje importante de ciudadanos consideraba que la actual policía era “peor” que la antigua policía nacional. En el segundo semestre del año, el tema de la policía pasó a un segundo plano y las dificultades evidenciadas en la administración de justicia opacaron la atención brindada al proceso de depuración, el cual se prolongará aún más. En todo caso, la nueva policía deja un saldo en rojo, en términos de confianza pública durante el 2000 y en comparación con otros años.

La otra institución creada a partir de los Acuerdos de Paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), también vio erosionada su confianza pública. Luego de ser depositaria de la mayor parte de la confianza ciudadana a la que una institución gubernamental puede aspirar en estos años, la imagen y el prestigio de la PDDH se hundió frente al público como producto de la gestión del Procurador Peñate Polanco, el cual finalmente renunció en el mes de febrero. A pesar de ello, la institución ha tenido dificultades para recuperar un buen concepto en la opinión pública, en parte por los problemas heredados de la gestión anterior y, en parte, como producto de que el nuevo titular mantuvo compromisos de orden político con su agrupación partidaria. Al final, las encuestas de opinión pública muestran que durante el 2000, las dos instituciones antes mencionadas comenzaron o continuaron una tendencia clara de erosión de la credibilidad ciudadana.

Como ya ha sido mencionado antes, de este proceso tampoco estuvieron exentas otras instituciones públicas relacionadas con el área de administración de justicia. Frecuentes fracasos en algunos casos claves

por parte de la Fiscalía, pusieron al descubierto la incapacidad de esta institución para perseguir y castigar efectivamente los delitos que ocurren en el país. La resolución en el caso de la niña Miranda, el sobreseimiento en el caso de la Federación de Fútbol y la resistencia de la institución a cumplir con su cometido de abrir la investigación en contra de los autores intelectuales de los jesuitas mostraron que la incapacidad de la Fiscalía no sólo tenía que ver con su competencia técnica, también tenía que ver con cierta dosis de negligencia deliberada en algunos casos. Esto sólo ha servido para confirmar la sensación de desamparo que prevalece en los salvadoreños con respecto a las instituciones llamadas a hacer cumplir la ley en el país. A diferencia de la PDDH y de la PNC, la Fiscalía no enfrentó un desgaste significativo de la confianza pública porque nunca ha llegado a tener los niveles de credibilidad que, en algún momento, tuvieron las instituciones creadas por la transición. De ahí que en el 2000, la mayor parte de la gente sólo confirmara su sospecha con respecto a este instituto público. Sin embargo, hay que decir que la figura personal del Fiscal ha mostrado un importante reconocimiento en algunos sectores de la opinión pública, probablemente debido a su protagonismo en los medios de comunicación y a su compromiso adoptado a finales de año de llevar a cabo también un proceso de depuración. En todo caso, esa aparente complacencia aún no se ha traducido en un cambio sustancial de percepción sobre el organismo en su conjunto.

En el caso del Órgano Judicial, a pesar de que los sondeos de opinión pública muestran una leve tendencia de mejoramiento de imagen y de confianza en la Corte Suprema de Justicia, la mayor parte de la gente sigue teniendo poca confianza en los tribunales y no piensa que la administración de justicia esté en la capacidad de hacer valer eficientemente el estado de derecho. Los fre-

cuentes juicios en los que los sospechosos son absueltos o sobreseídos por aspectos técnico-legales han puesto en duda la transparencia de numerosos jueces y operadores del sistema. A ello ha contribuido también la percepción de que los nuevos códigos penales están jugando un papel a favor de los que cometen delitos de cualquier tipo, obligando a los ciudadanos a conciliar en los casos en los cuales ha habido una clara violación de derechos.

En resumidas cuentas, el balance de la opinión pública sobre el sector de seguridad pública y de justicia es, de nuevo, negativo. La permanencia del problema de violencia y la inoperancia de las instituciones claves en el cumplimiento de los derechos básicos de seguridad y justicia han contribuido a que el año 2000 no haya registrado una modificación de la visión pesimista que impera en el país en esta área.

La otra área que, año tras año, suele ocupar la atención de la opinión pública es el área económica. El año 2000 no fue la excepción. Durante la mayor parte del año, los salvadoreños vivieron preocupados por los problemas de desempleo, pobreza e inflación y retuvieron la idea de que las acciones del gobierno no contribuyeron en mucho a resolverlos. Es más, la preocupación por la economía nacional se vio profundizada por el constante incremento a los precios de los hidrocarburos, el incremento a los servicios de agua, luz y teléfono y por el anuncio del gobierno de eliminar la exención del pago del IVA a los productos farmacéuticos y agrícolas. En otras palabras, la gente sentía que el costo de la vida se incrementó durante el 2000 y que, por tanto, la pobreza sumó ciudadanos en dicho año.

Este panorama poco alentador para la mayor parte del público salvadoreño se vio complicado por el anuncio del gobierno en los últimos días del año de llevar a cabo una nueva política monetaria, la cual implicaría la dolarización acelerada del país. Esto

llenó aún más de incertidumbre a la gente sobre las posibilidades de la economía salvadoreña en el siguiente año, pero sobre todo hizo que el año cerrara con un serio cuestionamiento de los ciudadanos de si el país no está acercándose demasiado a una situación limítrofe como producto de las acciones del gobierno. Aunque una parte de la gente parece aprobar la medida, la mayor parte de la población se ha declarado en contra de la misma y piensan que ella sólo contribuirá a favorecer a las personas de más poder en el país.

Todo lo anterior hizo que el año 2000 terminara con la sensación en el público salvadoreño de que la economía nacional estaba en una franca crisis y que la mayoría de la gente, a diferencia de otros años, apuntara a los temas económicos como los principales problemas nacionales por encima de la delincuencia y la violencia.

Finalmente, muchos sucesos ocurridos en la Asamblea Legislativa que tomó posesión a mediados de año, contribuyeron a profundizar más el clima de desencanto y la desconfianza popular hacia sus representantes parlamentarios. El rosario de sucesos se inicia con las negociaciones de los partidos de derecha para excluir al FMLN de la directiva de la Asamblea de forma permanente en el período que le correspondía por ley. Los partidos ARENA, PCN y PDC introdujeron una serie de reformas que establecían la rotación de la presidencia de la Asamblea Legislativa entre los partidos con más curules en el congreso. Esto generó un agrio debate en el recinto legislativo y asombro entre los salvadoreños. Al final, el FMLN decidió no participar de la nueva dinámica y decidió no subir a la directiva.

Pero quizás uno de los sucesos que más impactó a la opinión pública no sólo por el amplio tratamiento del hecho en los medios de comunicación sino por el carácter

delictual del hecho en sí mismo, fue el comportamiento de un diputado del PCN, quien, en estado de ebriedad, alteró el orden público y se enfrentó a una patrulla policial usando su arma de fuego. El tema cobró relevancia no sólo por el carácter de ese comportamiento sino también por la actitud de buena parte de los parlamentarios de proteger al diputado Francisco Merino del desafuero. Al final y en base a supuestas negociaciones entre los partidos ARENA y PCN, el diputado no fue juzgado por las autoridades competentes. Lo anterior mostró la poca disponibilidad de la Asamblea para actuar moralmente y apegada a los valores de justicia; además, puso en evidencia los mecanismos que permiten que muchas decisiones sean tomadas en base a los intereses particulares de los partidos y de ciertas personas, que en base al interés público.

A esa percepción se sumó sin duda la aprobación de una serie de leyes con las cuales buena parte de la población no parecía estar del todo de acuerdo. La ley de integración monetaria fue una de ellas.

Al final, el balance de la opinión pública deja un saldo en rojo en términos de la confianza pública hacia la institucionalidad del país. La percepción de la mayoría de los salvadoreños es que las instituciones vigentes no son capaces de ofrecer seguridad y orden en la mayoría de los ámbitos de la vida nacional. Los sucesos ocurridos en otras áreas de la vida nacional, como la epidemia de dengue, la mortalidad debida al alcohol, los conflictos en las maquilas y en otros campos laborales, contribuyeron también a esa sensación. Al final, el clima que se respira entre los ciudadanos es de incertidumbre y que el país se encamina a un estado de crisis aún mayor y generalizado. Lo que ocurra con la nueva política monetaria determinará si eso sucederá así o no.